

OBSERVACIÓN GENERAL DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDDIS), SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPRETAR EL ARTÍCULO I.2, INCISO B) IN FINE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Adoptada en la Primera Reunión Extraordinaria del CEDDIS en San Salvador, El Salvador, el 4 de mayo de 2011

GENERAL OBSERVATION OF THE COMMITTEE FOR THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES (CEDDIS), ON THE NEED TO INTERPRET ARTICLE I.2(B) IN FINE OF THE INTER-AMERICAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF ARTICLE 12 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Adopted in the First Special Meeting of CEDDIS in San Salvador, El Salvador, on May 4th, 2011



Organización de los
Estados Americanos

Español

Resolución **CEDDIS/RES.1 (I-E/11)**

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 de mayo de 2011)

EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Reunido en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, en el marco de su Primera Reunión Extraordinaria celebrada el 4 y 5 de mayo de 2011;

CONSIDERANDO:

Que en la resolución CEDDIS/Res.01/08 aprobada el 1 de agosto de 2008 durante la Segunda Reunión del Comité se adoptó a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como documento de referencia conceptual;

Que conforme a dicha resolución, los miembros del Comité habrían de tomar una decisión relativa al tema de la interdicción durante su Tercera Reunión;

Que durante su Tercera Reunión, los miembros del CEDDIS efectuaron un análisis preliminar sobre la figura de la interdicción y su correspondiente régimen de curatela a la luz del documento CEDDIS/doc.61/10 elaborado por la Secretaría Técnica;

Que tras la revisión del documento mencionado, el Comité decidió constituir un grupo de trabajo para analizar este tema con mayor profundidad y presentar sus conclusiones durante la Cuarta Reunión del Comité; y

Que dentro del marco de la Primera Reunión de Grupos de Trabajo del CEDDIS, celebrada en octubre 2010, los delegados presentes iniciaron un diálogo para atender la discrepancia normativa y conceptual existente entre la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al instituto de la interdicción y el régimen de curatela como mecanismo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y decidieron presentar sus conclusiones al resto de los miembros, durante su próxima reunión,

RESUELVE:

1. Adoptar el documento que se adjunta a la presente resolución CEDDIS/doc.12 (I-E/11) Rev. 1 “Observación General del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, sobre la necesidad de interpretar el artículo I.2, Inciso B) In fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 12 de la Convención de

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, como criterio de interpretación de este Comité, en cuanto al instituto de la interdicción.

2. Elevar dicha observación general a la consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA para su posterior remisión a la Asamblea General a los fines de solicitar su más amplia difusión entre los Estados Parte.

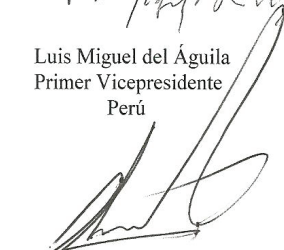
3. Elevar dicha observación general a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que esta requiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la emisión de una opinión consultiva sobre el alcance de la interdicción en el marco del documento que se adjunta.

Notifíquese


Vanda Pignato
Presidenta
El Salvador

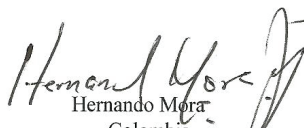

Luis Miguel del Águila
Primer Vicepresidente
Perú


Pablo Rosales
Segundo Vicepresidente
Argentina


Javier Salguero
Bolivia


Antonio Ferreira
Brasil


Ximena Rivas
Chile


Hernando Mora
Colombia


Adriana Retana
Costa Rica


Marta de Acuña
Guatemala


Ramón Alemán
Panamá


Zulma Ferreira
Paraguay


Mercedes Carrillo
Secretaria Técnica

**OBSERVACIÓN GENERAL DEL COMITÉ PARA
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (CEDDIS), SOBRE LA NECESIDAD
DE INTERPRETAR EL ARTÍCULO I.2, INCISO B)
IN FINE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 12 DE
LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

OEA/ Ser.L/XXIV.3.1
CEDDIS/doc.12 (I-E/11) Rev.1
4 mayo 2011
Original: **español**

**Primera Reunión Extraordinaria Del Comité Para La Eliminación
De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas
Con Discapacidad.**

I. Antecedentes

I. Antecedentes

Dentro del marco de la Primera Reunión de Grupos de Trabajo del CEDDIS, celebrada en octubre 2010, los delegados presentes iniciaron un diálogo para atender la discrepancia normativa y conceptual existente entre la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al instituto de la interdicción y el régimen de curatela como mecanismo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Conforme al artículo I.2.b de la Convención Interamericana adoptada en 1999, la declaratoria de interdicción hacia la persona con discapacidad no constituye un acto discriminatorio, norma que en opinión del Comité resulta obsoleta tras la adopción de la Convención de Naciones Unidas de 2006. El proceso de reforma de la Convención Interamericana puede estar dotado de complejidades y trámites extensos, por lo que de manera momentánea los miembros del Comité presentes sugirieron diseñar otras propuestas más viables que pudieran ser aprobadas durante la próxima reunión del Comité. En este sentido, se sugirió que como Comité adopten un criterio de interpretación el cual podría ser difundido masivamente.

Este criterio de interpretación debería anular, para efectos prácticos, esta primera parte del artículo I.2.b de la Convención Interamericana que es aclarativa, de modo de iniciar un proceso de transición toda vez que no se puede proponer un cambio inmediato ya que existe una cantidad considerable de personas interdictas. A este respecto, será necesario primeramente solicitar a los Estados que recopilen la información sobre el número de casos de interdicción decididos en las cortes nacionales.

A la par de este criterio de interpretación, se sugirió también la construcción de un sistema de apoyo alternativo, sustitutivo de la figura de la interdicción, dadas las serias implicaciones de esta institución, explicadas durante la presentación. Se comentó que un rasgo común en muchos de los países de la región es que los Códigos Civiles derivan del Derecho Romano o del Código Napoleónico que erróneamente consideraban interdictos a personas con discapacidades auditivas o de lenguaje, que hoy en día, con la ayuda de un intérprete, no tendrían por qué ser declarados interdictos.

El Comité está consciente de que una modificación de la normativa interna de los Estados parte de la Convención llevará un tiempo considerable, no obstante, ello no impide dejar claro, desde ahora, que efectivamente la figura de la interdicción constituye una discriminación para las personas con discapacidad y que debe

abogarse no por un régimen de curatela sino por un régimen de representación. La afirmación de que este régimen sí es discriminatorio reposa sobre el hecho de que las personas con discapacidad, para poder tener una representación legal después de su mayoría de edad deben ser declarados interdictos o insanos, por lo cual se sugiere encontrar un modelo de representación que no tenga que ver con la insania o la interdicción de modo que se asemeje al de cualquier otra persona.

Tras diversas intervenciones de los miembros del Comité acerca de las connotaciones que debían caracterizar la opinión a preparar, el representante de Argentina y Segundo Vicepresidente ante el Comité, Pablo Rosales, distribuyó en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo del CEDDIS el Proyecto titulado “Opinión del Comité de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA sobre la necesidad de interpretar el Artículo I.2, Inciso B) In fine en el marco del Artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU” que establece claramente que:

- La vigencia de la Convención de la ONU de 2006 implica el cambio del paradigma de la sustitución de la voluntad (que caracteriza al modelo de protección de la mayoría de los Códigos Civiles de Latinoamérica) al nuevo paradigma basado en la toma de decisiones con apoyos y salvaguardas del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU).

- Que la mayoría de los Códigos Civiles, principalmente, de los Estados de la región mantienen en sus normativas legales institutos jurídicos como la declaración de insania y la curatela como forma de representación legal de la personas con discapacidad, particularmente, personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad mental o intelectual y que dichas instituciones deben ser revisadas en el marco de lo establecido por el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas por mandato del artículo 4.1 inciso a) y b) de dicha Convención.

- Que la mayoría de los países miembros de la OEA han suscrito la Convención de Naciones Unidas y que por este motivo, una de las primeras medidas que deben adoptar los Estados es el necesario examen a fondo de la legislación y de las políticas nacionales locales, a la luz del instrumento ratificado, que habrá de considerarse no sólo artículo por artículo sino principalmente en su significado global, no bastando con reformar la legislación sino que es preciso acompañarla con medidas en el plano judicial, administrativo, educativo, financiero y social para hacerla operativa.

II. Adopción de criterio de interpretación

II. Adopción de criterio de interpretación

Los miembros del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el marco de su primera Reunión Extraordinaria celebrada en mayo 2011, en San Salvador, El Salvador, han revisado la propuesta presentada originalmente por Argentina, que fuese posteriormente revisada por Brasil, Costa Rica, Panamá y Perú, y tras el intercambio de opiniones entre los miembros del Comité presentes, deciden aprobar el siguiente criterio de interpretación:

Opinión del Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, sobre la necesidad de interpretar el artículo I.2, Inciso B) In fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

RESULTANDO:

Que el artículo I.2, de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA establece que:

2. Discriminación contra las personas con discapacidad

a) El término “discriminación” contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

Que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU establece una modificación en el criterio sustentado por la convención de la O.E.A. ya que establece que "...Por "discriminación por motivos de discapacidad" se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.";

Que este nuevo paradigma es profundizado en cuanto a la capacidad de hecho de las personas con discapacidad, entendida como la capacidad de ejercer sus derechos, en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU que establece que:

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica:

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos

y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Que la mayoría de los Códigos Civiles, principalmente, de los Estados de la región mantienen en sus normativas legales institutos jurídicos como la declaración de insania y la curatela como forma de representación legal de la personas con discapacidad, particularmente, personas sordas y personas con discapacidad mental o intelectual y que dichas instituciones deben ser revisadas en el marco de lo establecido por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la O.N.U. por mandato del artículo 4.1 inciso a) y b) de dicha Convención;

Este Comité declara que el criterio establecido en el artículo 1.2, inciso b) in fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la O.E.A. en cuanto establece que “En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación” guarda una seria contradicción con lo establecido por el artículo 2 y 12 de la Convención de Naciones Unidas y, en consecuencia, entiende que el mismo debe ser reinterpretado en el marco de la vigencia de este último documento.

CONSIDERANDO:

Que la entrada en vigor de la Convención de la ONU a partir del 3 mayo del 2008 implica el cambio del paradigma de la sustitución de la voluntad (que caracteriza al modelo de protección de la mayoría de los Códigos Civiles de Latinoamérica) al nuevo paradigma basado en la toma de decisiones con apoyos y salvaguardas del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU);

Que el artículo 12 de la Convención sobre reconocimiento de la personalidad jurídica, y de la capacidad jurídica y de obrar reviste un carácter central en la estructura del tratado, por su valor instrumental para el disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su significación en el proceso de transformación de la legislación interna (de fondo y de forma, civil y penal) y que la mayoría de los países miembros de la OEA han suscripto la Convención de Naciones Unidas;

Por este motivo, y en el marco del artículo 4.1 inciso a) y b) citado y con la finalidad de aplicar adecuadamente la Convención una de las primeras medidas que deben adoptar los Estados es el necesario examen a fondo de la legislación y de las políticas nacionales locales, a la luz del instrumento ratificado, que habrá de considerarse no sólo artículo por artículo sino principalmente en su

significado global como corpus iuris del derecho internacional, teniendo como guía sus propósitos (artículo 1 de la Convención citada) y sus principios generales (artículo 3), siempre en el marco de una concepción integral de los derechos humanos –civiles y políticos, económicos, sociales y culturales- reconociendo su interdependencia e indivisibilidad (Preámbulo de la Convención).

De lo afirmado se sigue que, salvo en aquellos casos en que los derechos y principios del tratado ya estén protegidos por el Derecho interno, el Estado Parte tiene la obligación de introducir los cambios necesarios para garantizar su conformidad con la Convención de la ONU., en los planos normativo y operativo. Pues no basta con reformar la legislación sino que es preciso acompañarla con medidas en el plano judicial, administrativo, educativo, financiero y social, entre otros.

Por otra parte, el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con anterioridad a la nueva Convención- reconoce “para todos” la personalidad jurídica, pero fue necesario un nuevo tratado específico referido a las personas con discapacidad con una disposición precisa (artículo 12) sobre tan trascendente cuestión, debido a la falta de efectividad y a la invisibilidad de las personas con discapacidad en el sistema de derechos humanos y en la sociedad.

El artículo 12 reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su capacidad jurídica, en sus dos sentidos, es decir como capacidad goce y como capacidad de ejercicio. Los Estados Parte reconocen la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, así como su capacidad jurídica y de obrar en igualdad de condiciones con los demás en todos los ámbitos de su vida. En los párrafos 3 y 4 los Estados se comprometen a proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo o asistencia que puedan necesitar para ejercer su capacidad jurídica, así como salvaguardias adecuadas y efectivas para evitar abusos.

En un reciente Informe de Naciones Unidas -“Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención” identificado con el número **A/HRC/10/48, de fecha 26 de Enero de 2009** - se afirma que:

“Toda ley que prevea que la existencia de una discapacidad es motivo directo e indirecto para declarar la incapacidad jurídica entra en colisión con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad consagrado en el párrafo 2 del art.12” por lo que los Estados Parte deberán modificar o derogar las normas que violan el deber de los Estados de respetar el derecho humano a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Además, respecto de los párrafos 3, 4 y 5 del mismo artículo 12 habrán de adoptarse “medidas que protejan y hagan efectivo ese derecho [...] Esto incluye lo siguiente: el reconocimiento jurídico del derecho de las personas con

discapacidad a la autonomía; a disponer de medios alternativos y aumentativos de comunicación; a la adopción de decisiones asistida, entendida como el proceso por el que una persona con discapacidad está habilitada para adoptar y comunicar decisiones con respecto a cuestiones personales o jurídicas; y el establecimiento de normas que precisen las facultades de quienes prestan el apoyo y su responsabilidad”.

En contraposición al respeto al derecho humano a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se halla el “asistencialismo” —reconocido como uno de los más arraigados obstáculos para implementar la Convención— que se caracteriza por la acción de quienes asumen la representación de otros a los que no consultan ni hacen partícipes, los “sustituyen”, siempre con “las mejores intenciones”, asumiendo que pueden decidir sobre sus deseos, elecciones y necesidades.

Lo que la Convención de la ONU exige es que el apoyo se sustente en la confianza, se proporcione con respeto, y en ningún caso en contra de la voluntad de la persona con discapacidad.

Muchas veces las personas con discapacidad necesitan apoyo, pero no sustitución, pero el apoyo contemplado por la Convención como “apropiado” es el que se centra en las capacidades (más que en las deficiencias) y en la eliminación de los obstáculos del entorno para propiciar el acceso y la inclusión activa en el sistema general de la sociedad (medio físico y cultural, justicia, vivienda y transporte, servicios sociales y sanitarios, oportunidades de educación y trabajo, vida cultural, gremial y política, deportes y recreación).

A diferencia de los sistemas de protección sustitutivos, que atrapan a las personas considerándolas un objeto a tutelar, el apoyo adecuado a la nueva normativa de derechos humanos se encamina a la liberación de las personas en sus propias vidas, a la ampliación de su esfera de actuación en la que decidan por sí mismas lo que quieran hacer y al reconocimiento del valor de su aporte a la sociedad que integran como ciudadanos y “como parte de la diversidad y de la condición humanas” (**artículos. 3.d, 8.1.c y 8.2.a) iii de la Convención**).

Teniendo en cuenta que la adopción de un paradigma de capacidad jurídica universal, que incluye a todas las personas con discapacidad, fue objetado durante la elaboración de la Convención, porque se temía que no daría cuenta adecuadamente de los problemas de aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, se estableció en el inciso 3 del artículo 12 la obligación de los Estados Partes a proveer apoyos y en el inciso 4 se agregaron las salvaguardas frente a los abusos que se pudieran derivar de dichos apoyos. En efecto, si no se hubiese previsto en la nueva Convención con carácter central el sistema de apoyos y salvaguardas, las personas con discapacidad con mayor necesidad de apoyo hubieran corrido el riesgo de quedar excluidas del reconocimiento pleno de su personalidad y capacidad jurídica.

La Convención entiende a la discapacidad como un fenómeno social, pues contempla la situación de las personas con diversas deficiencias (físicas, sensoriales, mentales e intelectuales) que al interactuar socialmente se encuentran con diversos tipos de barreras (legales, judiciales, físicas, actitudinales, arquitectónicas, entre otras) que se erigen como obstáculos para el goce de sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás. Por ello, se ha afirmado que para la aplicación plena y efectiva de la Convención es fundamental que en las legislaciones nacionales se considere a la discapacidad como un fenómeno social, lo que implica abandonar las definiciones de carácter médico únicamente, articuladas según el tipo de deficiencia, así como las basadas en la noción de actividades de la vida cotidiana, en las que la incapacidad para llevar a cabo esas actividades está asociada a la deficiencia.

Como mínimo, la Convención precisa que entre las personas con discapacidad figuran aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (**artículo 1**).

El modelo social (o de las barreras sociales) redefine el concepto de rehabilitación o normalización, estableciendo que éstas deben tener como objetivo la transformación de la sociedad, y no de las personas. Desde este modo, tanto el diseño para todos y como la accesibilidad universal se tornan determinantes para la prevención de la discapacidad.

Sobre la pregunta en torno a si la Convención de la ONU garantiza la capacidad jurídica a todas las personas con discapacidad, sería necesario hacer notar que no se ha incorporado una definición de discapacidad en el artículo 2 de la misma: “**Definiciones**”.

Sin embargo, una definición inclusiva se encuentra en el artículo 1°. Esta definición incluye a las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Evidentemente, la Convención ha utilizado la estrategia de enunciar explícitamente a ciertos grupos en la definición, con el objeto de enfatizar la mayor vulnerabilidad a sufrir discriminación a la que están expuestos, así como también la mayor necesidad de diseñar estrategias para fortalecer la capacidad de ejercicio y reclamo de derechos de estos grupos. Si se examinan las legislaciones nacionales y las prácticas de los estados, se constata que son precisamente a estos grupos a los que se les niega la capacidad jurídica. Las deliberaciones en torno a la Convención muestran que se sintió la necesidad de una Convención específica para las personas con discapacidad porque los tratados de Derechos Humanos ya existentes no eran incluyentes de la discapacidad y no proveían la justificación requerida para cuestionar las legislaciones nacionales excluyentes. A la luz de este compromiso global con la meta de inclusión en la Convención, resulta lógico concluir que el artículo 12 ha sido redactado en consonancia con este objetivo más amplio de la Convención.

Tras un examen de los trabajos preparatorios del tratado, puede constatarse que la adopción de un paradigma de capacidad jurídica universal, para todas las personas con discapacidad, fue objetada porque se temía que no daría cuenta adecuadamente de los problemas de aquellas personas con mayor necesidad de apoyo. Fue justamente en atención a ese temor que el inciso 3 del artículo 12 obliga a los Estados Partes a proveer apoyos, y que el 4 requiere una serie de salvaguardas frente a los abusos que se pudieran derivar de dichos apoyos.

Sin la previsión de estos apoyos y salvaguardas, el grupo de personas con mayor necesidad de apoyo podría haber quedado excluido del reconocimiento pleno de su personalidad y capacidad jurídica. Sin embargo, la lectura conjunta de la definición de discapacidad y la obligación de proporcionar apoyos conduce a la conclusión de que la redacción del artículo 12 incluye a todas las personas con discapacidad.

Desde esta aseveración el artículo 1.2 inciso b) in fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la O.E.A necesita ser reinterpretado a la luz del nuevo paradigma del artículo 12 citado.

No se trata solo de analizar la perspectiva de evaluar la legislación interna de cada Estado Parte en lo que respecta a la interdicción y curatela, sino también analizar, más allá de cuestiones jurídicas, las implicaciones prácticas de estas medidas estatales.

No debe confundirse el régimen de capacidad/incapacidad de ejercicio de los derechos en determinadas circunstancias, con la búsqueda de un modo de representación distinto de las personas con discapacidad que sostenga la autonomía de las mismas, reconozca su plena capacidad jurídica y personalidad jurídica, y proponga un modo de apoyos y salvaguardias, solo en los casos donde ello sea necesario. Es decir, partir de las capacidades de las personas, de aquello que pueden hacer por sí mismas, para luego determinar aquellas circunstancias que requieren de apoyos con salvaguardias.

RESOLUCIÓN

En cuanto al mandato de naturaleza jurídica el Comité resuelve

1. Instar a los Estados partes a que efectúen un estudio comparativo entre su legislación interna y el Derecho nacional de los demás Estados parte en la Convención Interamericana, en lo que respecta a las disposiciones sobre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, a fin de asegurarse que efectivamente mantienen una regulación acorde con sus necesidades desde todos los estratos sociales, y con la realidad institucional del país, pero en el marco del artículo 12 de la Convención de la ONU.

En cuanto al mandato de naturaleza práctica el Comité resuelve:

2. Solicitar al Secretario General de la OEA disponer, a través de sus instancias jurídicas pertinentes, la revisión del artículo I.2 inciso b) in fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, con el objeto de armonizarlo con el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de la persona con discapacidad de las Naciones Unidas, recomendando lo más conveniente, sea su inaplicación práctica, o su derogación.

3. Instar a los Estados parte de la Convención Interamericana a tomar medidas, en consonancia con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, para garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica universal, incluyendo a todas las personas con discapacidad, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, y en consecuencia con ello, iniciar en el más breve plazo un proceso de sustitución de la práctica de la interdicción, curatela o cualquier otra forma de representación, que afecte la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a favor de la práctica de la toma de decisiones con apoyo.

Lo anterior significa tomar acciones en la siguiente dirección:

1. Capacitar a la población en general, con especial énfasis en los operadores del sistema judicial, sobre el nuevo paradigma vigente de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluso aquellas con discapacidades severas, mediante el recurso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones.

2. Tomar medidas urgentes, de orden normativo, para asegurar que el sistema judicial no permita la aprobación de nuevos casos de interdicción, y para impulsar el desarrollo gradual de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones así como para la regulación e implementación de instituciones y mecanismos de salvaguarda para prevenir los abusos.

3. Tomar medidas para facilitar el proceso de revisión de los casos de interdicción de personas con discapacidad, con el objeto de adecuarse al nuevo paradigma, con especial énfasis en aquellos que se presenten dudas sobre la existencia de abusos, manipulación de intereses, o abusos.

4. Informar a este Comité acerca de las medidas tomadas y los avances que se vaya logrando en este proceso.

English

Resolution **CEDDIS/RES.1 (I-E/11)**

(Adopted at the fourth plenary session, held on May 4, 2011)

THE COMMITTEE FOR THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES

Gathered in San Salvador, Republic of El Salvador, for its First Special Meeting, held on May 4 and 5, 2011;

CONSIDERING:

That resolution CEDDIS/Res.1/08, adopted on August 1, 2008, during the Second Meeting of the Committee, approved use of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities as a conceptual frame of reference;

That, pursuant to said resolution, the Committee members would have to reach a decision on legal incompetence (*interdicción*) during the Committee's Third Meeting;

That, at their Third Meeting, the members of CEDDIS conducted a preliminary analysis of the legal definition of legal incompetence and its corresponding set of protection regulations, in light of document CEDDIS/doc.16/10, drawn up by the Technical Secretariat;

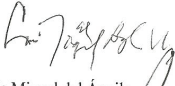
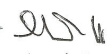
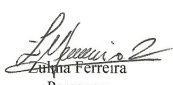
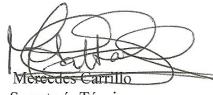
That, after reviewing the aforementioned document, the Committee decided to establish a working group to analyze this matter in greater depth and present its conclusions during the Fourth Meeting of the Committee; and

That within the framework of the First Meeting of CEDDIS Working Groups, held in October 2010, the delegates attending it began a dialogue to address the regulatory and conceptual discrepancy between the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities with respect to the institution of legal incompetence and protection rules as a mechanism for the exercise of the legal capacity of persons with disabilities, and decided to present their conclusions to the other members at their next meeting,

RESOLVES:

- 1.To adopt the document attached to this resolution, CEDDIS/doc.12 (I-E/11) rev. 1, "General Observation of the Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities on the need to interpret Article 1.2(b) in fine of the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities in the context of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities," as this Committee's interpretation criterion with respect to the institution of legal incompetence.
- 2.To submit said general observation to the Committee on Juridical and Political Affairs of the OAS Permanent Council for its consideration and subsequent referral to the General Assembly, with a view to requesting that it be disseminated as widely as possible among the States Parties.
- 3.To submit said general observation to the Inter-American Commission on Human Rights in order for it to request the Inter-American Court of Human Rights to issue an advisory opinion on the scope of legal incompetence within the framework of the attached document.

Let notice be given

 Luis Miguel del Águila Primer Vicepresidente Perú	 Vanda Pignato Presidenta El Salvador	 Pablo Rosales Segundo Vicepresidente Argentina
 Javier Salguero Bolivia	 Antonio Ferreira Brasil	 Ximena Rivas Chile
 Hernando Mora Colombia	 Adriana Retana Costa Rica	 Marta de Asis Guatemala
 Ramón Alemán Panamá	 Zulma Ferreira Paraguay	 Mercedes Carrillo Secretaría Técnica

**GENERAL OBSERVATION OF THE COMMITTEE
FOR THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST PERSONS WITH
DISABILITIES (CEDDIS), ON THE NEED TO
INTERPRET ARTICLE I.2(B) IN FINE OF THE
INTER-AMERICAN CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST PERSONS WITH DISABILITIES IN THE
CONTEXT OF ARTICLE 12 OF THE UNITED
NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES.**

OEA/ Ser.L/XXIV.3.1
CEDDIS/doc.12 (I-E/11) Rev.1
28 April 2011
Original: **Spanish**

**First Special Meeting of the Committee for the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities**

I. Background

I. Background

I. Background

Within the framework of the First Meeting of CEDDIS Working Groups, held in October 2010, the delegates attending it began a dialogue to address the regulatory and conceptual discrepancy between the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities with respect to the institution of legal incompetence and protection rules as a mechanism for the exercise of the legal capacity of persons with disabilities.

Pursuant to Article I.2(b) of the Inter-American Convention adopted in 1999, declaration of a person as legally incompetent does not constitute discrimination, a provision that the Committee regards as obsolete following the adoption of the United Nations Convention of 2006. Given that the process of reforming the Inter-American Convention could be complex and cumbersome, for the time being the Committee members present suggested crafting other more viable proposals that could be approved at the Committee's next meeting. Accordingly, it was suggested that they, as a Committee, adopt an interpretation criterion that could be disseminated on a massive scale.

This interpretation criterion should annul, for practical purposes, the first explanatory part of Article I.2(b) of the Inter-American Convention, in such a way as to initiate a transition process, particularly since it was not possible to propose an immediate change, given the existence of a very large number of people declared to be legally incompetent. To that end, it will first be necessary to ask states to compile information on the number of legal incompetence cases decided by their domestic courts.

It was also suggested, along with this interpretation criterion, to construct an alternative support system to replace the legal incompetence concept, given the latter institution's serious implications, as explained in the course of the presentation. It was pointed out that one thing many countries in the region have in common is that their Civil Codes derive from Roman Law or from the Napoleonic Code, both of which wrongly regarded as legally incompetent persons with hearing or language disabilities whom, nowadays, with the help of an interpreters, there would be no reason to consider legally incompetent.

The Committee is aware that amendments to the domestic laws and regulations of the States Parties to the Convention will take a long time. Nevertheless, that does not preclude making it clear, right away, that the legal incompetence concept constitutes discrimination for persons with disabilities and that what should be advocated is not a set of protection regulations but, rather, a system of representation. The assertion that this set of protection regulations is discriminatory is based on the fact that, in order to have legal representation after they come of age, persons with disabilities have to be declared legally incompetent or insane; for that reason, it is suggested that a representation model be found that is unrelated to insanity or legal incompetence and is similar to legal representation of anyone else.

After various statements by Committee members on the connotations that the upcoming opinion should have, the representative of Argentina and Second Vice Chair of the Committee, Pablo Rosales, distributed to those attending the First Meeting of the CEDDIS Working Group a draft document entitled “Opinion of the OAS Committee of the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities regarding the need to interpret Article I.2(b) in fine in the context of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which clearly establishes that:

- The fact that the United Nations Convention is in force implies a change of paradigm away from substitution of a person’s will (which characterizes the protection model in most Civil Codes in Latin America) to the new paradigm based on decision-making with support and safeguards set forth in Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

- That most Civil Codes, especially in Latin America, still retain in their legal provisions institutions such as declaration of insanity and protection as a way to afford legal representation to persons with disabilities, particularly persons with hearing or mental disabilities, and that said institutions need to be revised in light of the provisions of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as mandated in Article 4.1(a) and (b) of said Convention.

That most OAS member states have signed the United Nations Convention and that, for that reason, one of the first steps the states must take is to conduct the required in-depth examination of their local domestic laws and policies in light of the instrument they have ratified, which will have to be considered not only article by article but, above all, in terms of its overall significance. It will not suffice just to amend legislation. The amendments will have to come with the judicial, administrative, educational, financial, and social measures needed to enforce it.

II. Adoption of the interpretation criterion

II. Adoption of the interpretation criterion

II. Adoption of the interpretation criterion

At their First Special Meeting, held in San Salvador, El Salvador, in May 2001, the members of the Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities reviewed the proposal originally presented by Argentina and subsequently revised by Brazil, Costa Rica, Panama, and Peru, and after an exchange of views with the Committee members present at the meeting, decided to adopt the following interpretation criterion:

Opinion of the Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities on the need to interpret Article I.2(b) in fine of the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities in the context of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

WHEREBY:

Article I.2 of the OAS Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities establishes that:

2. Discrimination against persons with disabilities

a) The term “discrimination against persons with disabilities” means any distinction, exclusion, or restriction based on a disability, record of disability, condition resulting from a previous disability, or perception of disability, whether present or past, which has the effect or objective of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by a person with a disability of his or her human rights and fundamental freedoms.

b) A distinction or preference adopted by a state party to promote the social integration or personal development of persons with disabilities does not constitute discrimination provided that the distinction or preference does not in itself limit the right of persons with disabilities to equality and that individuals with disabilities are not forced to accept such distinction or preference. If, under a state’s internal law, a person can be declared legally incompetent, when necessary and appropriate for his or her well-being, such declaration does not constitute discrimination..”

That Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities established a modification of the criterion upheld in the OAS Convention because it states that “...’Discrimination on the basis of disability’ means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”;

That this new paradigm delves deeper into the de facto capacity of persons with disabilities, in the sense of capacity to exercise their rights, in Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which establishes that:

Article 12 - Equal recognition before the law

- 1.** States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.
- 2.** States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
- 3.** States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
- 4.** States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person’s circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person’s rights and interests.
- 5.** Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial

affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.

- That most Civil Codes, especially in Latin America, still retain in their legal provisions institutions such as declaration of insanity and protection as a way to afford legal representation to persons with disabilities, particularly persons with hearing or mental or intellectual disabilities, and that said institutions need to be revised in light of the provisions of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as mandated in Article 4.1(a) and (b) of said Convention;

This Committee declares that the criterion established in Article I.2(b) in fine of the OAS Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, inasmuch as it establishes that “If, under a state’s internal law, a person can be declared legally incompetent, when necessary and appropriate for his or her well-being, such declaration does not constitute discrimination”, seriously contradicts the provisions of Articles 2 and 12 of the United Nations Convention, and the Committee therefore construes that the aforementioned criterion must be reinterpreted in light of the latter document currently in force.

CONSIDERING:

- That the entry into force of the United Nations Convention as of May 3, 2008 implies a change of paradigm away from substitution of a person’s will (which characterizes the protection model in most Civil Codes in Latin Americas) to the new paradigm based on decision-making with support and safeguards set forth in Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities;

That Article 12 of the Convention on recognition as persons before the law, legal capacity, and the exercise thereof is central to the structure of the Convention, because of its instrumental value for ensuring enjoyment of the human rights of persons with disabilities and its significance for the transformation, in form and substance, of domestic (civil and criminal) legislation, and that most OAS member states have signed the United Nations Convention;

For that reason, and in the context of aforementioned Article 4.1(a) and (b) and for the purpose of adequately implementing the Convention, one

of the first steps that states must take is to conduct a in-depth review of their domestic legislation and policies in light of the instrument they have ratified, which should be reviewed not just article by article but, above all, in terms of its overall significance as a body of international law. That review must take as its guideline the purposes of that Convention (Article 1) and its general principles (Article 3), always within the framework of an overarching conception of human -- civil and political, economic, social, and cultural -- rights, that recognizes their interdependence and indivisibility (Preamble to the Convention).

It follows from the above that, except in cases in which the rights and principles upheld in the Convention are already protected under domestic law, a State Party is under an obligation to introduce the changes needed, at the regulatory and operational levels, to ensure conformity with the United Nations Convention. This is because it is not enough to amend legislation; those amendments have to be accompanied by judicial, administrative, educational, financial, social, and other measures.

For its part, Article 16 of the International Covenant of Civil and Political Rights -- prior to the new Convention -- states that “everyone” shall have the right to recognition [everywhere] as a person before the law. However, a specific new treaty was needed to refer to persons with disability in a precise provision (Article 12) on such an important matter, given the ineffectiveness and invisibility of persons with disabilities in the human rights system and in society.

Article 12 of the United Nations Convention reaffirms that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law in the dual sense of persons enjoying that right and persons actually exercising that right. The States Parties recognize persons with disabilities as persons before the law, with legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. In paragraphs 3 and 4 of Article 12, the states commit to providing access by persons with disabilities to the support or assistance they may require in exercising their legal capacity, as well as to appropriate and effective safeguards to prevent abuse.

A recent United Nations Report entitled “Thematic Study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on enhancing awareness and understanding of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (**A/HRC/10/48 of January 26, 2009**)” asserts that: “Whether the existence of a disability is a direct or indirect ground for a declaration of legal incapacity, legislation of this kind conflicts with

the recognition of legal capacity of persons with disabilities enshrined in article 12, paragraph 2, “ so that states should amend or abolish norms that violate the duty of states to respect the human right to legal capacity of persons with disabilities.

Moreover, in accordance with Article 12, paragraphs 3, 4, and 5, measures are to be adopted “that protect and fulfil this right [...] This includes: legal recognition of the right of persons with disabilities to self-determination; of alternative and augmentative communication; of supported decision-making, as the process whereby a person with a disability is enabled to make and communicate decisions with respect to personal or legal matters; and the establishment of regulations clarifying the legal responsibilities of supporters and their liability.”

In stark contrast to respect for the human right to legal capacity of persons with disabilities is the “handout approach” (asistencialismo), which is widely recognized as one of the most entrenched obstacles to implementation of the Convention. It is characterized as actions by those who represent others without either consulting them or allowing them to participate. They simply “replace” them, always with “the best intentions,” assuming that they can decide for them what they want, choose, and need.

What the United Nations Convention demands is that support be based on trust, provided with respect, and never against the will of the person with disabilities.

Persons with disabilities do very often need support, but not replacement. The support envisioned by the Convention as “appropriate” focuses on abilities (more than on disabilities) and on elimination of obstacles in the environment so as to facilitate access and pro-active inclusion in social life (the physical and cultural environment, justice system, housing and transportation, social and health services, educational and labor opportunities, cultural, professional, and political life, sports, and recreation).

Unlike substitutive protection systems, in which people are trapped and objectified as wards, support guided by the new human rights approach is geared toward increasing personal freedoms in people’s lives, broadening the spheres in which they can decide for themselves, and enhancing recognition of the value of their contribution to the society they form part of as citizens and “as part of human diversity and humanity” **(Articles 3(d), 8.1(c), and 8.2(a) iii of the Convention.**

Mindful that the adoption of a paradigm of universal legal capacity that includes all persons with disabilities was objected to during the preparation of the Convention because it was feared that it would not adequately address the issues of those persons most in need of support, paragraph 3 of Article 12 established the obligation of the States Parties to provide support and paragraph 4 added the obligation to provide safeguards to prevent any abuse deriving from said support. Indeed, if the new Convention had not focused on the support and safeguards system, the persons with disabilities most in need of support would have risked being excluded from full recognition as persons before the law with legal capacity.

The Convention views disability as a social phenomenon, since it addresses the circumstances of persons with a range of impairments (physical, sensory, mental, and intellectual) who, in their social interaction, encounter various types of legal, judicial, physical, attitudinal, architectural and other barriers that hinder enjoyment of their rights on an equal basis with others. That is the reason for the assertion that full and effective implementation of the Convention requires that domestic legislation regard disability as a social phenomenon, which means relinquishing both solely medical definitions centered on type of impairment and those focusing on day-to-day activities (the inability to carry them out being associated with “disability”).

The Convention (Article 1) specifies that persons with disabilities include, at a minimum, those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

The social model (or social barriers) redefines (s) the concept of rehabilitation or habilitation by establishing that the goal must be to transform society, not persons. From this standpoint, both universal design and universal accessibility become crucial factors for preventing disability.

Regarding the question of whether the United Nations Convention guarantees legal capacity for all persons with disabilities, it should be noted that Article 2 of the Convention (“**Definitions**”) does not include a definition of disability.

However, an “includes” definition can be found in Article 1. This definition of persons with disabilities includes those who have long-term physical,

mental, intellectual or sensory impairments. Evidently, the strategy used in the Convention is to make explicit mention of certain groups in the definition, to highlight their greater vulnerability to discrimination and the more pressing need to design strategies for strengthening these groups' ability to exercise and claim their rights. A review of domestic legislations and of the actual practices of states shows that it is precisely these groups to whom legal capacity is denied. The deliberations surrounding the Convention show that a need was felt to develop a specific Convention for persons with disabilities, because already existing human rights treaties did not include disability and did not provide grounds for questioning domestic legislations that excluded it. In light of this global commitment to the goal of including persons with disabilities in the Convention, it is only reasonable to conclude that Article 12 was drafted with that broader objective of the Convention in mind.

A review of the work done in the run up to the Convention reveals that there were objections to adopting a universal legal capacity paradigm for all persons with disabilities, due to a fear that not enough attention would be paid to those persons most in need of support. It was precisely in order to address that fear that Article 12.3 obliges states to provide support, and 12.4 calls for a series of safeguards against possible abuse derived from said support. Without provision for such support and safeguards, the group of persons most in need of support could have been excluded from full recognition as persons before the law with legal capacity. However, if one takes the definition of disabilities in conjunction with the obligation to provide support, it is fair to conclude that the drafting of Article 12 includes all persons with disabilities.

That being so, Article I.2(b) in fine of the OAS Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons With Disabilities needs to be reinterpreted in light of the new paradigm set forth in the aforementioned Article 12.

It is not just a matter of analyzing the prospect of assessing each State Party's domestic legislation with respect to declaration of legal incompetence and protection measures. Apart from the legal issues, it is also a question of analyzing the practical implications of these state measures.

The rules regarding capacity or incapacity to exercise rights under particular circumstances should not be confused with the quest for a

different way of representing persons with disabilities, one that supports their autonomy, recognizes them fully as persons before the law with legal capacity, and proposes support and safeguards only when they are necessary. That means starting from what people are able to do, what they can do for themselves, and only then determining the circumstances under which they do need support, along with safeguards.

RESOLUTION

As regards the legal mandate, the Committee resolves:

1. To urge the states parties to conduct a comparative study of their domestic laws and the domestic laws of the other States Parties to the Inter-American Convention, with regard to the provisions on the legal capacity of persons with disabilities, in order to ensure that they maintain regulations based on their needs in all their social strata and on their country's institutional capacity, but within the framework of Article 12 of the United Nations Convention.

As regards the practical mandate, the Committee resolves:

2. To request the OAS Secretary General to order a revision, by the appropriate legal bodies, of Article 1.2(b) in fine of the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, with a view to aligning it with Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and recommending whichever is best: its non-application in practice or its repeal.

3. To urge the States Parties to the Inter-American Convention to adopt measures, in keeping with Article 12 of the United Nations Convention, to guarantee recognition of universal legal capacity, including that of all persons with disabilities, regardless of the type or extent of disability, and, consequently, to initiate without delay a process for replacing the practice of declaring legal incompetence, guardianship, or any other form of representation that impairs the legal capacity of persons with disabilities, with a practice based on decision-making with support.

The foregoing entails taking steps to:

- 1.** Train the general public, and justice system operators in particular, regarding the new paradigm in effect with respect to the legal capacity of all people with disabilities, including those with severe impairments, through recourse to decision-making support systems.
- 2.** Adopt urgent measures of a regulatory nature to ensure that the judicial system disallows the approval of new declarations of legal incompetence and to foster the gradual development of decision-making support systems, as well as the regulation and implementation of institutions and mechanisms to safeguard against abuse.
- 3.** Facilitate the review of cases in which persons with disability have been declared legally incompetent, with a view to aligning them with the new paradigm, with particular emphasis on those in which there are queries as to the existence of abuse or manipulation of interest .
- 4.** Report to this Committee on measures adopted and any progress made in this process.

the recognition of legal capacity of persons with disabilities enshrined in article 12, paragraph 2, “ so that states should amend or abolish norms that violate the duty of states to respect the human right to legal capacity of persons with disabilities.

Moreover, in accordance with Article 12, paragraphs 3, 4, and 5, measures are to be adopted “that protect and fulfil this right [...] This includes: legal recognition of the right of persons with disabilities to self-determination; of alternative and augmentative communication; of supported decision-making, as the process whereby a person with a disability is enabled to make and communicate decisions with respect to personal or legal matters; and the establishment of regulations clarifying the legal responsibilities of supporters and their liability.”

In stark contrast to respect for the human right to legal capacity of persons with disabilities is the “handout approach” (asistencialismo), which is widely recognized as one of the most entrenched obstacles to implementation of the Convention. It is characterized as actions by those who represent others without either consulting them or allowing them to participate. They simply “replace” them, always with “the best intentions,” assuming that they can decide for them what they want, choose, and need.

What the United Nations Convention demands is that support be based on trust, provided with respect, and never against the will of the person with disabilities.

Persons with disabilities do very often need support, but not replacement. The support envisioned by the Convention as “appropriate” focuses on abilities (more than on disabilities) and on elimination of obstacles in the environment so as to facilitate access and pro-active inclusion in social life (the physical and cultural environment, justice system, housing and transportation, social and health services, educational and labor opportunities, cultural, professional, and political life, sports, and recreation).

Unlike substitutive protection systems, in which people are trapped and objectified as wards, support guided by the new human rights approach is geared toward increasing personal freedoms in people’s lives, broadening the spheres in which they can decide for themselves, and enhancing recognition of the value of their contribution to the society they form part of as citizens and “as part of human diversity and humanity” **(Articles 3(d), 8.1(c), and 8.2(a) iii of the Convention.**